



Witness for Peace
Solidarity Collective

PROGRAMA COLOMBIA INFORME ANUAL 2023





Quienes somos

El Colectivo Solidario Acción Permanente por la Paz (Witness for Peace Solidarity Collective) es una organización independiente estadounidense fundada en 1983 por activistas de este país para dar respuesta a los devastadores efectos de la financiación de Estados Unidos a Los Contras en Nicaragua. Desde entonces, ha desarrollado su actividad para visibilizar los impactos de la política exterior estadounidense en varios países de América Latina. Actualmente, trabaja en Honduras, Cuba y Colombia.

En el Colectivo Solidario creemos que la transformación social se construye desde la base y trata de construir una solidaridad transnacional para resistir las políticas corporativas y del Gobierno de Estados Unidos que contribuyen a la violencia, la pobreza y la opresión en las Américas, acercando la realidad de los pueblos más afectados a la sociedad civil estadounidense y contando con una red de activistas alrededor de dicho país.

En Colombia, el Colectivo Solidario trabaja desde la implementación del Plan Colombia en el 2000, a fin de visibilizar los impactos sobre las comunidades de la financiación militar estadounidense de la “Guerra contra las Drogas” y la penetración de corporaciones transnacionales impulsados por el Tratado de Libre Comercio firmado en el 2011.



NUESTRAS FORMAS DE TRABAJO

Educación política - Proporcionamos recursos educativos y formación sobre los impactos de las política exterior estadounidense hacia América Latina y los procesos de resistencia de los movimientos sociales a dichas políticas. Intentamos movilizar a nuestra base en Estados Unidos a favor del cambio y en apoyo a estos procesos de base de resistencia noviolenta.



Incidencia- A través de campañas legislativas concretas y acciones urgentes en Estados Unidos involucramos constantemente a nuestras redes para promover políticas de paz y justicia hacia América Latina y el Caribe.



Acompañamiento físico y político - Nuestros programas en Colombia y Honduras apoyan a las comunidades y líderes/as sociales en riesgo, ofreciéndoles acompañamiento físico en algunas regiones del país y organizándose para que sus voces sean amplificadas y lxs responsables de la toma de decisiones respondan a sus peticiones.





CONTEXTO DE COLOMBIA

El 7 de agosto de 2022, por primera vez en su historia contemporánea, Colombia dio un giro de gobierno hacia la centro-izquierda, dando paso al "Gobierno de la Gente, el Gobierno de los Nadie, el Gobierno de la Vida", en palabras del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

Desde su llegada a la Casa de Nariño, el nuevo Gobierno ha anunciado que su prioridad sería alcanzar la paz, por lo que lo primero que hizo al posesionarse fue reabrir los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en La Habana. En noviembre de 2022 el Gobierno logró aprobar la ley que permite la apertura de diálogos con todos los actores armados del país, conocida como Paz Total.

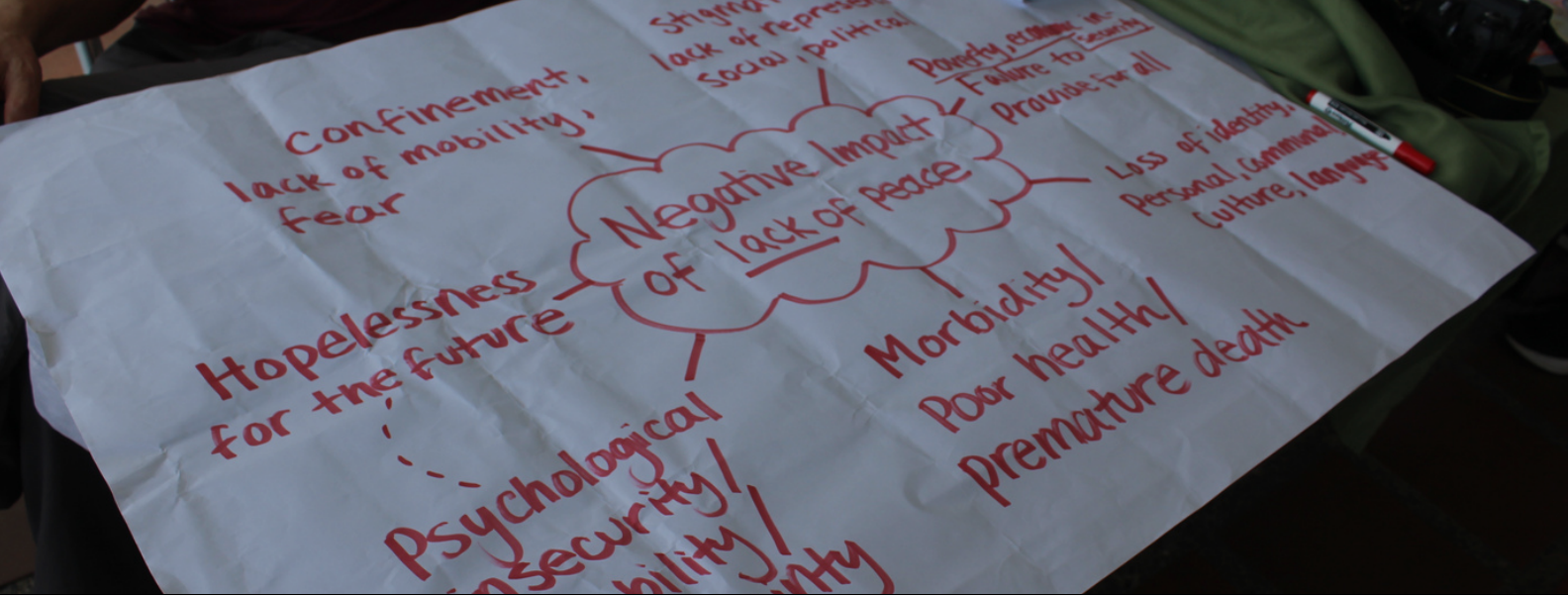
PAZ TOTAL

Esta nueva propuesta de paz tiene la intención de dar resolución a todos los conflictos armados existentes en territorio colombiano. Para ello prevé dos tipos de negociaciones:

Negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley con los que se adelantan diálogos de carácter político, en los que se pactan acuerdos de paz.

Acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de delincuencia de alto impacto con el fin de judicializarlos y desarticularlos.





En relación con el primer punto, actualmente se adelantan dos procesos de negociación con el ELN y el Estado Mayor Central (EMC), una de los dos grupos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP). En ambos casos hay discusiones difíciles. En las negociaciones, ambos grupos piden reformas estructurales. Sin embargo, ambos han acordado un cese al fuego temporal con la fuerza pública pero no entre ellos. Más recientemente se ha anunciado la apertura de diálogos con la Segunda Marquetalia, el otro grupo disidente de las extintas FARC-EP.

Si bien las comunidades históricamente afectadas por la violencia consecuencia de estos conflictos armados tienen altas expectativas en que se alcance la paz, todavía es muy pronto para visualizar los efectos de estos diálogos en los territorios.

A esta situación se le suma, la necesidad de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC-EP, una demanda que sigue estando presente de parte de las comunidades indígenas, negras y campesinas más afectadas por la violencia consecuencia del conflicto armado. Desde el Colectivo, en noviembre realizamos una gira a Estados Unidos para visibilizar y amplificar las voces de comunidades campesinas.



POLÍTICA NACIONAL DE DROGAS

“Cultivando vida, desterramos el narcotráfico” (2023-2033)

De la mano de la Paz Total va la nueva política de drogas, pues la guerra contra las drogas ha sido uno de los factores que acrecentó la violencia y cuyos impactos recayeron, principalmente sobre comunidades indígenas, negras y campesinas empobrecidas.

La nueva política de drogas se ha resumido en dos palabras: oxígeno y asfixia. La primera tiene como objetivo acabar con la dependencia de las poblaciones de la economía de la droga, así como evitar la criminalización de lxs campesinos que siembran coca. La asfixia, dice el documento que anuncia la nueva política nacional de drogas, se empleará contra “elementos estratégicos y de alto valor del sistema del narcotráfico”, entre ellos la infraestructura de producción y los precursores químicos, las finanzas ilegales y el blanqueo de dinero.

El nuevo plan representa un enorme cambio de estrategia con respecto a las medidas que los gobiernos anteriores, con el apoyo y liderazgo de Estados Unidos, adoptaron para hacer frente al narcotráfico. En lugar de tomar medidas contra los cultivadores de coca, la nueva iniciativa pretende enfrentarse directamente a las redes de narcotráfico de Colombia. Sin embargo, aún no se conoce cuáles serán exactamente los mecanismos de implementación y será necesario esperar su aplicación para conocer los resultados de esta nueva política pública propuesta para los próximos diez años.



SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Si bien la propuesta de paz total y la nueva política de drogas intentan responder a las promesas realizadas en la campaña para la elección presidencial y a las demandas de las comunidades históricamente más afectadas por las dinámicas del conflicto armado, **la situación de derechos humanos sigue siendo muy preocupante**, especialmente, en algunas regiones donde el Colectivo acompaña y donde las comunidades y organizaciones siguen insistiendo y trabajando en la paz para sus territorios.

Terminar con la persecución a quienes trabajan por la defensa y la construcción de paz en sus comunidades sigue siendo uno de los principales desafíos del gobierno colombiano y una de las demandas urgentes de las comunidades y organizaciones acompañadas por el Colectivo Solidario en Colombia. Ante este contexto, desde el Colectivo, realizamos varios **acompañamientos y visitas al Cauca, Putumayo y Chocó con nuestras contrapartes.**

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS



Según INDEPAZ, que monitorea la violencia en el contexto del conflicto armado en Colombia, en 2023:

188

Líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados

Firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 asesinadxs

44

93

Masacres con 300 víctimas

<https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2023/>

ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA



En octubre de 2022, **Estados Unidos se convirtió en el primer Acompañante Internacional del Capítulo Étnico** del Acuerdo de Paz de Colombia de 2016, tras un arduo trabajo de incidencia por parte de organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales.

Desde organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos que acompañan comunidades étnicas en Colombia **llamaron a que la comunidad internacional y el gobierno de los Estados Unidos, en particular como el acompañante del Capítulo Étnico, a esforzarse más por garantizar que la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) se fortalezca** y tenga los recursos financieros y políticos para que pueda actuar rápida y efectivamente.

CAPÍTULO ÉTNICO DEL ACUERDO DE PAZ DE 2016

LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS Y LA MILITARIZACIÓN

Ante el anuncio de la nueva política de drogas, prevista para los próximos 10 años, el gobierno colombiano sostuvo que **“El Gobierno de los Estados Unidos de América mantiene la certificación a Colombia por su lucha y adecuado enfrentamiento al fenómeno de las drogas ilícitas”**.

Mediante memorando oficial, el presidente Joe Biden señaló la importancia de Colombia como socio estratégico en Suramérica en la lucha contra el narcotráfico. En su pronunciamiento instó al Gobierno colombiano priorizar sus esfuerzos en las regiones productoras de coca y lograr un progreso sostenible de las comunidades.

No obstante, al mismo tiempo que se anuncia una nueva política de drogas y paz, **la cooperación de Estados Unidos hacia Colombia en materia de defensa y seguridad se mantiene**. Tal es así que se firmó un nuevo plan de acción bilateral “enfocado en el desarrollo de capacidades de las Fuerzas Especiales Colombianas” para el período 2025-2029, calificado como “histórico” por parte de la embajada de EEUU en Colombia.

Asimismo, **la decisión de militarizar la isla Gorgona continúa** a pesar de las denuncias y protestas realizadas por diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente, en diciembre pasado se realizó nuevamente **la feria de armas más grande de América Latina en Bogotá, Expodefensa, dónde estuvieron presentes más de 200 empresas, entre ellas 51 empresas estadounidenses**, que lucran con la guerra.

Como Colectivo nos sumamos a la campaña No Más Expodefensa junto a otras organizaciones antimilitaristas colombianas e internacionales.

TRABAJO DEL PROGRAMA COLOMBIA EN 2023





ACOMPañAMIENTO A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS



La inauguración de la Casa Madre - un espacio interétnico compartido para la construcción de paz entre comunidades campesinas, negras e indígenas, entre las que también viven firmantes de paz, en la vereda La Blanquita-Murrí (noroccidente antioqueño); una de las regiones históricamente afectadas por las dinámicas del conflicto armado y presencia paramilitar.



Una misión humanitaria liderada por Justapaz a Istmina, Nóvita y varias veredas de la cuenca del río Sipí (Chocó), a comunidades cristianas que estaban en situación de confinamiento y desplazamiento forzado debido a las confrontaciones entre grupos paramilitares y guerrilleros por el control del territorio y sus recursos.



Evento de conmemoración a 40 años de la desaparición forzada de miembros de la comunidad de Palestina (Huila) y la persistencia de la lucha de sus familias por la verdad y la justicia.





Visita de CONPAZCOL a reuniones con líderes(as) y jóvenes de La Blanquita-Murri



En 2023, el equipo de Colombia acompañó a nuestras contrapartes en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Chocó, Antioquia, Huila y en Bogotá.

VISIBILIZACIÓN DE LAS LUCHAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, NEGRAS Y CAMPESINAS QUE SE RESISTEN A LA VIOLENCIA EN SUROCCIDENTE COLOMBIANO Y EN BOGOTÁ



En enero, el equipo encabezó una delegación de 10 ciudadanxs estadounidenses, entre lxs que se encontraban líderes y lideresas de comunidades de fé, activistas medioambientales y periodistas.

Lxs delegadxs pudieron conocer de primera mano la resistencia noviolenta de las comunidades y organizaciones de base que defienden su territorio y trabajan por la construcción de la paz en las regiones del Cauca y el Valle del Cauca.



ASPROZONAC y finca La Elvira, en Miranda, Norte del Cauca.



PCN (Proceso de Comunidades Negras) en Buenaventura, Valle del Cauca



Renacer Siglo XXI en Timba, Norte del Cauca



Espacio Humanitario de Puente Nayero en Buenaventura, Valle del Cauca



Galería de la Memoria, Fundación Guagua en Cali, Valle del Cauca



Comunidad indígena Wounaan Nonam desplazada en Buenaventura, Valle del Cauca



En marzo, el equipo publicó un artículo sobre la lucha por condiciones de vida dignas para las comunidades indígenas desplazadas en Bogotá.

Casi un año después, las familias siguen alojadas en los mismos espacios sin ningún tipo de respuesta integral por parte del Estado. En octubre pasado, representantes de Autoridades Indígenas en Bakatá fueron recibidas por el presidente de la Nación, pero aún así no han tenido respuesta a sus reclamos. Hoy las comunidades siguen reclamando que se les escuche y se dé respuesta al Acuerdo asumido por el Estado en mayo de 2022. Eso significa que haya asistencia humanitaria para quienes se encuentran alojadxs en la UPI La Rioja y que el retorno a los territorios sea voluntario y en condiciones de seguridad para quienes decidan regresar, pero que haya un plan de reubicación para quienes no quieren retornar porque no hay condiciones para hacerlo.

En marzo, el equipo publicó otro artículo sobre la resistencia de las mujeres negras, indígenas y campesinas contra la violencia en la región del Pacífico colombiano.

Si bien se ha intentado invisibilizar la resistencia no violenta liderada por mujeres, en particular, en esta región de Colombia, ellas siguen alzando la voz para recordar una y otra vez el rol que las mujeres han tenido en la protección de sus familias y sus comunidades, como han tenido que poner el cuerpo para resistir. Porque como bien dice Deyanira, los cuerpos de las mujeres y, en particular, de las mujeres negras han sido instrumentalizados como botín de guerra.



En octubre, el equipo publicó un artículo sobre la actual lucha por la justicia de las familias campesinas cuyos seres queridos fueron desaparecidxs forzosamente.

Entre las demandas de las familias presentes está no sólo conocer la verdad sobre lo que les ocurrió a sus seres queridos, sino también que se mantenga viva su memoria y que haya una reparación justa. Su petición es que ninguna otra familia vuelva a sufrir semejantes crímenes. En las vidas y acciones de muchxs, las almas de Tulio Enrique Chimonja y de todxs lxs desaparecidxs siguen vivas





**INCIDIMOS Y CONSTRUIMOS
SOLIDARIDAD PARA EL CAMBIO DE
POLÍTICAS INTERVENCIONISTAS DE
ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA Y EL
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL
ACUERDO DE PAZ DE 2016**

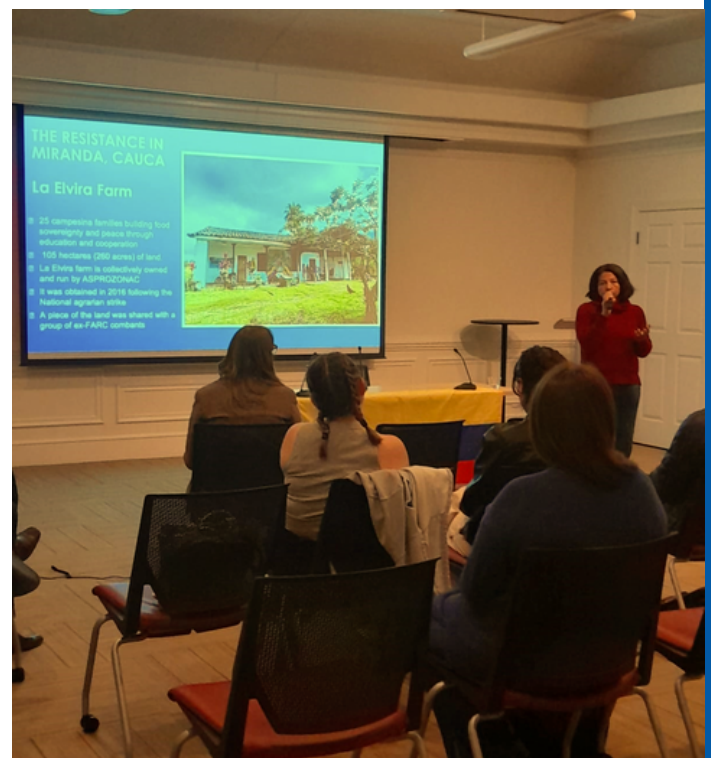
Gira de incidencia con Briceida Lemos

En noviembre, APP organizó una gira de incidencia política con Briceida Lemos, lideresa social campesina de Miranda (Norte del Cauca), en Carolina del Norte y Washington DC. Los aprendizajes de la gira, así como una lista de las organizaciones, universidades, colectivos, grupos de fe y oficinas del Congreso con las que Briceida se reunió y habló sobre la defensa de la tierra, la soberanía alimentaria y la necesidad de fortalecer el apoyo a la implementación al Acuerdo de Paz se pueden encontrar en este [informe](#).

Acción urgente

En junio, el equipo publicó una solicitud de acción urgente para proteger a la población campesina de Miranda en riesgo de desplazamiento forzado debido a los enfrentamientos entre grupos armados presentes en el territorio.

Queremos expresar nuestra gratitud a todxs los que se movilaron para firmar la petición y compartir la acción urgente con otras personas.





No Más Expodefensa

En septiembre, el equipo se unió a la campaña No Más Expodefensa, una de las mayores ferias de armas que se celebra cada dos años en Bogotá.

Las empresas estadounidenses que venden armas y sistemas militares mantienen con diferencia la mayor presencia de empresas extranjeras en la feria. APP se sumó a otras organizaciones antimilitaristas nacionales e internacionales que llevan ya 6 años exigiendo al gobierno colombiano que no permita la realización de esta feria de armas en el país.

Porque consideramos que no hay paz posible si continúa la militarización, nos pronunciamos en contra de Expodefensa y el negocio de la guerra, el cual solo acarrea muerte y destrucción para las comunidades que hemos acompañado desde nuestra llegada a Colombia.



EN MEMORIA DE ACTIVISTAS QUE INSPIRARON A MUCHXS: ¡PRESENTE! ¡PRESENTE! ¡PRESENTE!

En 2023, perdimos a dos personas a las que acompañamos y admiramos por su compromiso con la resistencia no violenta y su trabajo por la justicia. Nos gustaría compartir sus historias. Su memoria sigue viva. Que las semillas en las que se convirtieron crezcan y se multipliquen.

PHANOR GUAZAQUILLO PEÑA

Phanor tenía 45 años cuando un desconocido terminó con su vida de forma abrupta y violenta frente a su pareja y amigxs, el 3 de diciembre de 2023. Phanor dedicó su vida a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, a la construcción de la paz entre los pueblos étnicos de Colombia y a la defensa de la tierra frente a las corporaciones petroleras y los proyectos extractivistas. Líder del pueblo Nasa Kwesx Kiwe en Puerto Asís, Putumayo, Phanor apoyó el fortalecimiento de otras comunidades indígenas, negras y campesinas en sus resistencias no violentas. El trabajo de Phanor fue conocido tanto dentro como fuera de Colombia. Fue vocero nacional de la Instancia Especial de Alto Nivel para los Pueblos Étnicos en Colombia (IEANPE), y participó en la construcción del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz de 2016 en La Habana, Cuba.

El equipo de APP conoció a Phanor, apenas tres meses antes de su asesinato, mientras acompañaba uno de los eventos organizados por nuestrxs compañerxs de Comunidades Construyendo Paz en Colombia (CONPAZCOL), de la cual Phanor hacía parte como miembro de la junta directiva. Su muerte fue una trágica pérdida para los procesos de resistencia que acompañaba. En su casa, en Putumayo, acompañamos la ceremonia de su "siembra" (en su tradición nasa los cuerpos y las vidas de las personas se siembran, no se entierran). Que la semilla de vida y transformación en que se ha convertido Phanor crezca poderosa y fuerte. Que esta semilla se multiplique no sólo a través de sus hijxs y líderes/as de su comunidad que asumieron la continuación de su obra sino también en toda Colombia, y más allá.



EN MEMORIA DE ACTIVISTAS QUE INSPIRARON A MUCHXS: ¡PRESENTE! ¡PRESENTE! ¡PRESENTE!

OLGA CASTILLO

“Aquí estoy y aquí me quedo”, nos dijo Olga Lucía Castillo Campo, cuando la conocimos a finales de 2022. Llevaba un mes frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Allí, al lado de varias pancartas exigiendo justicia para su hija y su familia, permaneció varios meses. Ante la falta de respuesta, se trasladó a la Cancillería colombiana. Allí permaneció otros tantos meses hasta que el cáncer de mamas que le habían diagnosticado en 2022 hizo metástasis en los pulmones y la obligó a internarse. Olga estuvo 16 años reclamando que se juzgue a los dos responsables de la violencia sexual contra su hija, quien en 2007 tenía solamente 12 años. Los responsables son dos ciudadanos estadounidenses, Michael J. Coen y César Ruiz, ambos al servicio del Plan Colombia en la base militar de Melgar (Tolima) en ese momento. Olga murió sin ver la justicia por la que tanto luchó, Olga no sólo murió luchando por el derecho a la justicia sino también por el derecho a la salud.

Ante el dolor que aún nos produce su partida, recordamos que su lucha no ha terminado, que su muerte no es el fin, que su muerte no es la muerte de su lucha, que ella sigue viva en cada una de las personas que escuchamos su historia y aprendimos de ella. Su lucha por la justicia y por el fin de la impunidad para militares y contratistas estadounidenses que violentan a niñas y mujeres en Colombia continúa. La búsqueda de justicia continuará, su resistencia no será en vano, su memoria está viva. Olga está viva en cada unx de nosotrxs.





AGRADECIMIENTOS

El Colectivo Solidario Acción Permanente por la Paz desea expresar su más profundo agradecimiento:

- **A nuestras contrapartes en Colombia** quienes han estado siempre en la primera línea resistiendo de forma no violenta y han compartido sus luchas con nosotrxs y con nuestra comunidad en los Estados Unidos.
- **Al pueblo de los Estados Unidos que ha demostrado su solidaridad de múltiples maneras y a todxs aquellxs que de una u otra forma emprendieron acciones para cambiar las políticas estadounidenses** que impactan negativamente a los países latinoamericanos.

NOS GUSTARÍA AGRADECER ESPECIALMENTE A:



Todxs nuestrxs donantes que continúan apoyando este importante y crítico trabajo. No podríamos hacerlo ni continuar sin ustedes.

Todxs aquellxs que hicieron posible la gira de Briceida por Carolina del Norte y Washington DC para que en los Estados Unidos pudieran aprender sobre la lucha campesina por la paz en su territorio en Colombia.

Lxs delegadxs que vinieron a Colombia para experimentar la realidad de las comunidades negras, indígenas y campesinas y que continúan brindando apoyo desde su regreso a casa.

Gail Phares, fundadora de Witness for Peace, por tantos años de solidaridad, buen hacer y amor por las Américas, a John Walsh y David Pegg por su experiencia y presencia en Colombia.

Bárbara Orozco Díaz, por su compromiso con este trabajo y por haber hecho parte del equipo en Colombia durante un período de reconstrucción y consolidación del Colectivo en el país. Gracias compañera por estar siempre dispuesta a acompañar las resistencias grandes o pequeñas.